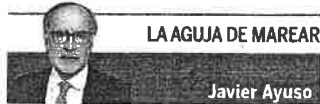


Cuando la barra libre se convierte en borrachera de déficit y deuda pública



LA AGUJA DE MAREAR

Javier Ayuso

Se veía venir, pero el cambio de posición de la Unión Europea respecto a la austeridad de la crisis de 2008 impidió que se plantearan medidas correctoras ante la mala gestión de determinados gobiernos europeos frente a la barra libre de fondos para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social. Y la realidad nos ha echado un jarro de agua fría a los trece meses de iniciarse la pandemia. Los fondos europeos no llegarán hasta entrado el otoño y España ya ha batido todos los récords de déficit público (11% del PIB, el más alto de la UE) y deuda pública (120%), sin apenas ayudas directas a las empresas, que son las que crean y mantienen el empleo.

Al final, la barra libre anunciada por Bruselas y defendida por todos los organismos multinacionales, se puede convertir en una borrachera de gasto, déficit y deuda pública, con escaso control, nula transparencia y sin los planes de reformas estructurales negociados con las fuerzas políticas, sociales y económicas. Muchos anuncios oficiales, fotos estrechando los codos y propaganda sin fin, mientras el dinero se derrocha a la espera de que lleguen los 140.000 millones de euros de la UE y Pedro Sánchez pueda convocar elecciones anticipadas.

Los datos difundidos la semana pasada por Eurostat son, cuanto menos, preocupantes. España cerró 2020 con el mayor déficit público de los todos los países de la Unión Europea, un 11% del PIB. Además, la ratio de deuda pública se sitúa en cuarto lugar de la UE, con un 120% del PIB, tan solo detrás de Grecia (206,6%), Italia (155,8%) y Portugal (133,6%). En total el endeudamiento público español se situó al acabar el pasado año en 1,34 billones de euros, cifra que supera los 1,36 billones en febrero. Y las previsiones para el año en curso son todavía peores, ya que el Gobierno no ha tenido más remedio que revisar a la baja las previsiones de crecimiento, después de una caída del PIB del 10,8% el año pasado, con lo que los ingresos públicos serán inferiores a los presupuestados.

En 2020 los ingresos presupuestarios se situaron en el 41,3% del PIB, muy por debajo de los previsto por el parón de la economía que afectó muy negativamente a la recaudación fiscal. Frente a ello, el gasto público se disparó más de diez puntos, hasta el 52,3% del PIB. La mayoría de los desembolsos se destinaron al colchón social lanzado por el Gobierno para afrontar las duras condiciones de los ciudadanos por la crisis. El servicio del

desempleo y el coste de los ERTE han disparado el gasto.

Aunque no sirva de consuelo, nuestros vecinos europeos también han visto crecer los números rojos en sus cuentas públicas. Alemania cerró 2020 con un déficit público del 4,2% y una deuda del 69,8%, Francia, 9,2% y 115,7% e Italia, 9,5% y 155,8%. Sin embargo, los tres han destinado más fondos a ayudas directas que España. La media de los Veintisiete sitúa el déficit en el 6,9% (7,2% en la eurozona) y la deuda en el 90,7% (98% entre los catorce) al finalizar 2020.

Esta evolución era más que previsible y tanto la Comisión Europea, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Banco Central Europeo han alentado las políticas de no escatimar en gastos para hacer frente a un golpe tan fuerte (la mayor caída del PIB desde la Segunda Guerra Mundial), pero que se calculaba más corto de los que está sucediendo. Las sucesivas olas de expansión del coronavirus, ya estamos en la cuarta, han obligado a los estados de la UE a prolongar la barra libre de gasto y ver cómo los ingresos

fiscales siguen cayendo por los obligados confinamientos.

Lo que no ha cambiado es la voluntad de las autoridades comunitarias a volver a una cierta normalidad a partir de 2023, como muy tarde. Desde el primer momento, Bruselas advirtió de que los gobiernos comunitarios deberán elaborar planes de ajuste que aseguren la sostenibilidad de las cuentas públicas cuando la economía inicie su recuperación. Eso quiere decir que los presupuestos de 2022 no pueden ser tan expansivos como los de este ejercicio y que los del año siguiente deberán ser restrictivos para

evitar que se reproduzca una crisis de la deuda como la de hace diez años. La palabra ajuste tomará protagonismo y llegarán los recortes.

El Banco Central Europeo informó la semana pasada de que continuará con su política de compra de deuda pública o otras medidas de apoyo. Su presidenta, Christine Lagarde, envió el jueves pasado un mensaje de prudencia y alejó la idea de una rápida retirada de los estímulos. "Tenemos un largo camino aún para cruzar el puente de la pandemia y que la recuperación sea sostenible", dijo Lagarde, tras anunciar que los tipos de interés se mantenía a cero.

Pero los expertos ya han advertido que cuando la autoridad monetaria europea cierre el grifo, los gobiernos deberán emplearse a fondo en ajustar sus cuentas públicas si no quieren correr serios riesgos de solvencia. Igual que los ERTE se acabarán convirtiendo en ERE, en buena parte, las ayudas europeas pueden acabar en rescates si no se plantean planes de reequilibrio fiscal desde el próximo año.



Pedro Sánchez.